

Jalisco: los problemas de una alternancia

*Jorge Alonso Sánchez**

RESUMEN

Al finalizar 1996 el PAN gobernaba ya a un 37.9 por ciento de los mexicanos, sobre todo en zonas urbanas importantes. Cuatro gubernaturas y 225 municipios estaban en manos panistas. Además contaba con 23 senadores, 108 diputados federales, 145 diputados locales y 561 regidores. No obstante, la estructura del régimen de partido de Estado se concentraba fincada en la Presidencia de la República, en el control del Congreso de la Unión y en el poder regional de la mayoría de las entidades federativas. En este contexto, las alternancias regionales estarán acotadas por esta realidad onerosa, pero no dejara de haber manifestaciones de nuevas relaciones entre gobierno y ciudadanía que conviene examinar. Habrá, además, problemas propios de los nuevos equipos que acceden al poder y tienen que enseñarse a gobernar con el viejo método de ensayo y error. El presente escrito es un recuento de contradicciones, tropiezos y logros de una alternancia particular: la jalisciense.

ABSTRACT

At the end of 1996 the PAN was already governing 37.9 per cent of the Mexicans, especially in important urban regions. Four state governments and 225 local governments were run by the PAN. In addition, the PAN had 23 senators, 108 federal representatives, 145 local representatives and 561 town councillors. Nevertheless, the regime's structure, a State party, was concentrated in the Presidency, in the control over Congress and in the regional power of the majority of the federal states. In this context, the regional alternations will be defined by the costly reality; yet, there will still be the need to examine the demonstrations of the new relationships between the government and the citizens. In addition, there will be problems with the new teams in power who will have to learn using the old trial and error method. This paper recounts the contradictions, setbacks and achievements of a particular alternation: the one from the state of Jalisco.

*Profesor-investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-Occidente. E-mail: jalonso@fuentes.csh.udg.mx

Introducción

Aunque erosionado, todavía persiste en México un régimen de partido de Estado. La alternancia que propiciará la transición a la democracia será necesariamente la de la Presidencia de la República. Mientras la ciudadanía consiga esa meta democrática, las alternancias regionales pueden ir empujando hacia esa dirección. Al finalizar 1996 el PAN gobernaba ya a un 37.9 por ciento de los mexicanos, sobre todo en zonas urbanas importantes. Cuatro gubernaturas y 22.5 municipios estaban en manos panistas. Además contaba con 23 senadores, 108 diputados federales, 145 diputados locales y 561 regidores. No obstante, la estructura del régimen de partido de Estado se concentraba fincada en la Presidencia de la República, en el control del Congreso de la Unión y en el poder regional de la mayoría de las entidades federativas. En este contexto, las alternancias regionales estarán acotadas por esta realidad onerosa, pero no dejará de haber manifestaciones de nuevas relaciones entre gobierno y ciudadanía que conviene examinar. Habrá, además, problemas propios de los nuevos equipos que acceden al poder y tienen que enseñarse a gobernar con el viejo método de ensayo y error. El presente escrito es un recuento de contradicciones, tropiezos y logros de una alternancia particular: la jalisciense.¹

Promesas incumplidas

El 12 de febrero de 1995 la mayoría de los ciudadanos jaliscienses decidió una alternancia, y abrumadoramente votó por la oposición panista. Con esto manifestó que quería cambios de fondo. Esto trastocó no sólo estructuras de poder político, sino también entramados económicos y maneras de interrelación entre las élites tradicionales. Se inició una compleja transición política. Un nuevo equipo se hizo cargo del gobierno de la entidad federativa, pero con los instrumentos burocráticos y corporativos del régimen de partido de Estado. Los panistas accedieron al poder gubernamental, pero no asumieron el control estatal. La mayoría de los ciudadanos, anhelando tranquilidad e institucionalidad, cansados de crisis, corrupción y descrédito priísta, emitieron un voto que tuvo mucho de castigo, con lo que propiciaron una nueva forma de relación de la sociedad con los gobernantes. Confiaron en el nuevo equipo panista. La sociedad había sufrido dolorosos agravios que no habían sido resarcidos. Los más notables entre ellos eran los producidos por las explosiones en un sector popular de Guadalajara el 22 de abril de 1992 y el asesinato del cardenal Posadas trece meses después. La campaña panista había apelado a esa problemática, que estuvo presente en el ánimo de no pocos votantes. No obstante, una vez iniciado el periodo del nuevo gobierno, pese a los primeros intentos por reabrir esos casos, proclamados ya cerrados por parte de la PGR y pendientes para la sociedad, se constató que el cambio de gobierno en la entidad no implicaba que los nuevos gobernantes tuvieran influencia sobre asuntos que eran de competencia federal,

A mediados de 1995 el Comité de Derechos Humanos 22 de Abril demandó apoyo al gobierno panista. Las deudas de los créditos que había aportado el Fondo Jalisco, aumentadas por las altas tasas de interés, tenían agobiados a los damnifica-

1 La mayor parte de la información de este escrito proviene de una serie de entrevistas realizadas con metodología antropológica con funcionarios, dirigentes partidistas y miembros de organizaciones no gubernamentales.

dos que habían aceptado esa forma de resolver su desgracia. Solicitó a Projal que no procediera judicialmente en contra de los que no podían pagar. Demandó que los adeudos fueran pagados por el gobierno a cuenta de indemnizaciones prometidas y no dadas. En septiembre, el gobernador anunció que los casos no atendidos serían evaluados y resueltos, pues había personas que habían recibido hasta cinco cheques, mientras muchos damnificados no habían visto ninguno. Se realizó un cotejo de padrones del Patronato de Reconstrucción y de la Sedesol con la información que tenía la Subsecretaría de Participación Social para hacer una depuración. A finales de 1995 el gobierno informaba que había atendido a 1 571 afectados, con lo que consideraba haber cumplido con el compromiso adquirido de retomar el caso del 22 de Abril. Sobre todo, recalcó que se había mostrado sensibilidad en la atención a los lesionados y en la reestructuración de los créditos otorgados por Fojal a microempresarios de la zona afectada. Sin embargo, a principios de 1996 una organización de damnificados se quejó porque, a pesar de que el gobierno había prometido que los lesionados serían atendidos por la Secretaría de Salud, 82 de sus afiliados consideraban que esa dependencia no contaba con los aparatos y medicamentos necesarios y que la atención que les querían dar era la que se ofrecía al público en general, cuando de lo que se trataba era de que hubiera una reparación por el daño causado. Exigieron pensión vitalicia y atención médica integral y especializada de por vida. En el punto de solución a los problemas de inquilinos había muchas deficiencias. Otra cuestión fundamental era el esclarecer la responsabilidad de Pemex, agravio que había quedado relegado. Se imponían las versiones de la PGR. El gobierno blanquiazul había querido entrar de lleno a este problema, pero pronto se le impuso el punto de vista del gobierno federal. Además, había optado por atender los casos de los damnificados de manera individual y desconfiando de los agrupamientos. Organismos civiles propusieron al gobernador que se nombrara una comisión de verdad para el caso del 22 de Abril. Pero éste, aduciendo que eso podría politizar el problema, rechazó la solicitud. Con motivo del cuarto aniversario de las explosiones, organizaciones de damnificados volvieron a presionar a las autoridades panistas para que encararan los problemas relegados. El gobernador, una vez más, reactivó promesas en el sentido de que gestionaría lo de las pensiones vitalicias y la atención médica para los lesionados, y el procurador, ante manifestantes, se comprometió a buscar que se hiciera justicia. No obstante, a nivel federal se apuntaba que el caso estaba legalmente cerrado. Con menor tono que en la campaña, los panistas manifestaron que reasumían compromisos con los afectados del 22 de Abril. Las presiones surtieron algún efecto, al menos en lo declarativo, pero la confianza en la efectividad de las promesas ha ido menguando. A principios de 1997, aunque dispersos y debilitados, persistían organismos de damnificados que reclamaban todavía soluciones gubernamentales.

En cuanto al esclarecimiento del asesinato del cardenal Posadas, los obispos de la entidad se habían opuesto a la versión oficial de la PGR que indicaba que se trataba de una confusión. Tres veces se declaró cerrado el caso, y otras tantas los obispos manifestaron que las explicaciones oficiales no eran convincentes. El gobierno panista también se vio constreñido a plegarse a la PGR. Y cuando el cardenal Sandoval expresó que había indicios en el sentido de que el asesinato de su antecesor había sido intencional, el gobierno local lo solicitó que aportara pruebas para poder intervenir. El gobernador, Cárdenas Jiménez-

nez, en su primer informe apuntó que en las investigaciones del crimen del cardenal Posadas no se habían hallado nuevos elementos, pero que seguía la búsqueda. A finales de 1996 el gobierno federal dejó entender que se podría reexaminar el caso. Entre las varias hipótesis por examinar estaba la que apuntaba que días antes del asesinato del prelado éste había tenido un altercado con Salinas en torno a la responsabilidad de Pemex en las explosiones del 22 de abril. Los obispos y una mayoría de ciudadanos opinaban que se trataba de un crimen de Estado más, y que por lo tanto no sería esclarecido. En esta forma, esas dos grandes deudas del Estado con la sociedad en los dos primeros años de un nuevo gobierno de extracción panista no pudieron saldarse, y han quedado pendientes.

La inseguridad pública

Tanto el gobierno federal, a cargo del PRI, como el gobierno estatal panista de Jalisco han ido sufriendo un grave desgaste a raíz de una creciente y no controlada inseguridad pública. El Grupo de los Cien, en marzo de 1996, denunció *que* a nivel nacional la corrupción policíaca era una de las causas de la inseguridad pública, aunada a la incapacidad del gobierno. Aseguraban que un Estado que no podía suministrar seguridad pública a sus ciudadanos no podía proveer nada. Una encuesta de Gobernación manifestaba que siete de cada 10 mexicanos consideraban a la inseguridad como el primer problema del país. Después del Distrito Federal y del Estado de México, Jalisco ocupaba un tercer lugar entre los sitios más inseguros. En esta entidad, un sondeo de opinión publicado por la prensa en ese mismo mes arrojaba que para un 73.2 por ciento la procuración de justicia en Jalisco era ineficiente y para un 79 por ciento la ciudad de Guadalajara resultaba insegura. Un 47.6 por ciento creía que la inseguridad era igual a la de los últimos tiempos, mientras un 38.8 por ciento estaba convencido de que había empeorado. Aumentaba el clamor ciudadano para que el gobierno la remediara. Los partidos de oposición afirmaban que de no haber solución en este importante punto la credibilidad del gobierno panista caería irremediablemente. Las autoridades reconocían que los índices de criminalidad habían llegado a niveles alarmantes. Para ejemplificar con un indicador, el robo de vehículos en el primer año de la administración panista se había incrementado en un 56.3 por ciento. A finales de 1996 las cifras aumentaron tanto en este rubro como en el de los asaltos bancarios.

La actitud de muchos cuerpos policíacos seguía siendo atemorizante más para la ciudadanía *que* para los maleantes. Un grave problema en el rubro de seguridad lo enfrentó de inmediato el nuevo gobierno ante un motín en el penal de Puente Grande. En un enfrentamiento entre custodios federales estatales y Policía Judicial Federal con internos perdieron la vida siete presos. El gobernador reconoció que no había podido anticipar ese problema. Se decretó orden de aprehensión en contra de varios custodios, y en lo relativo a los elementos de la PJF se pasó la causa al fuero judicial federal. El gobernador enfatizó que el gobierno y la sociedad no solaparían que en las cárceles estatales siguiera existiendo descontrol y tráfico de estupefacientes. Por lo pronto, se tuvieron que hacer ajustes en el equipo de seguridad pública.

La muerte de cuatro niños en el Hospital de Pediatría del Centro Médico de Occidente del IMSS, también en los primeros meses del gobierno panista, provocó revuelo en la opinión pública. Se exigió que se investigara el caso, y se llegó a la

conclusión de que se había dado contaminación del aire medicinal administrado en la anestesia. Se turnó el caso a la PGR. Otro hecho que causó indignación pública fue el asesinato del ex procurador Larios, a quien se le había quitado la protección. Se encontró y encarceló al asesino.

Hubo otra contradicción entre el gobierno panista y la Procuraduría General de la República. El gobernador de Jalisco declaró que se oponía a la prepotencia y lamentable trabajo de la Policía Judicial y exigió policías federales aptos y eficientes. Cuando cayó el narcotraficante *el Güero Palma*, se evidenció que prácticamente todos los judiciales federales que operaban en Jalisco tenían complicidad con el narcotráfico.

El gobernador a mediados de 1995 se comprometió a presentar un plan integral sobre seguridad pública. Pero uno de los problemas serios del nuevo gobierno se ha dado en este punto. Las contradicciones entre los grupos panistas que accedieron al poder junto con estructuras heredadas constituyeron un nudo ciego que al finalizar el primer año de la gestión panista no se había podido desatar.

Otra contradicción sería se dio entre los métodos para enfrentar la criminalidad por parte de un elemento protegido por los militares encargado de los operativos de seguridad y el procurador de Jalisco, quien provenía de *medios académicos*. El primero se quería mostrar *eficiente sin importar* los métodos; el segundo exigía que se acataran las leyes y que se respetaran los derechos humanos. Una primera confrontación se dio en cuanto a la propuesta de retenes. El gobernador declaró que serían el último recurso para enfrentar la inseguridad pública. A finales de 1995 se llegaron a poner puestos de vigilancia a las salidas de la capital del estado con el fin de detectar autos robados. Después se hizo una campaña de despistolización. La situación de inseguridad hizo crisis en febrero de 1996.

En un operativo para rescatar a una joven secuestrada resultó muerto el secuestrador y la víctima por clara ineficiencia de parte de las policías encargadas del caso. La falta de cooperación entre las policías y la contradicción entre el encargado de la seguridad y el procurador orilló al gobernador a despedir al primero. Los cuerpos al mando de este militar destituido salieron armados a las calles a protestar por esa remoción y violentaron las puertas de la Cámara de Comercio, en donde se llevaba a cabo un evento internacional para la prevención del delito. Esa protesta, arropada por el ejército, constituyó un acto de provocación contra el gobierno panista. No se trató de un acto de protesta ciudadana sino de una rebelión de policías que, siguiendo órdenes provenientes de reducidos militares, trataron de amedrentar a gobierno y sociedad. El gobernador tuvo que recurrir al presidente de la República y al secretario de la Defensa Nacional para encarar este conflicto que podía tomar proporciones incontrolables, pues los grupos amparados por los militares no querían perder sus antiguas zonas de control y ganancias. La insurrección policíaca evidenció que existían fuertes grupos de poder que no permitían que se atentara contra sus espacios de dominio y que buscaban por todos los medios *que la nueva línea de búsqueda del respeto a los derechos humanos fuera relegada*. En esta guerra sorda, además de los movimientos tras bambalinas, fueron utilizados los medios masivos de comunicación, en los que el procurador fue calumniado y hostigado por astutos manipuladores de los hilos del viejo y operante poder.

Entre las causas del incremento de la inseguridad en la entidad las autoridades panistas señalaron la falta de coordinación, aceptaron cierta inexperiencia, pero resaltaron que uno de los elementos que estaba originando tanta delincuencia era la crisis

económica y lo inadecuado de las políticas económicas a nivel nacional. Para abatir los índices de criminalidad habría que abrir nuevas fuentes de empleo. Además, el gobierno panista en Jalisco, en sentido inverso de sus colegas promotores de las nuevas leyes para enfrentar la delincuencia a nivel nacional, estaba convencido de que la mano dura no resolvería nada, pues la violencia llamaba a más violencia. No obstante, la claridad de sus planteamientos chocaban con las realidades, porque no se habían podido conjurar las intrincadas complicidades entre los cuerpos de policía heredados, el hampa y el narcotráfico. El gobernador se quejó de que hubiera jueces que liberaran a delinquentes confesos. El cardenal advertía que se trataba de una dura lucha por el poder; encima, en uno de sus arranques declarativos, exhortó a los hogares a que pensarán en tener armas para defenderse de tanta inseguridad. Otra cuestión que también salió a flote a raíz de estos problemas fue el tratamiento que no pocos medios de prensa daban a estos asuntos. Como el gobierno panista no ofrecía dinero a los periodistas, y había no pocos de ellos que estaban acostumbrados a esa relación, y dado que en otros medios del aparato estatal nacional activos en el estado proseguían con la arraigada costumbre que en la jerga periodística se ha denominado “chayote”, se notó que había quienes querían ensalzar al ejército y denostar a los nuevos gobernantes. El gobernador *llegó a decir que veía cierta* conspiración en su contra. Al concluir 1996 la tensión cedió. El cambio de autoridades militares propició que se recompusieran las relaciones entre el gobierno local y el ejército.

Lo que podía atribuirse como un logro de la nueva administración era que las quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra de la Procuraduría habían disminuido en un 49 por ciento. La Procuraduría insistía en que se debía impartir justicia con respeto a la legalidad y a los derechos humanos. Intentaba hacer participar a la ciudadanía en la prevención del delito. Así se integraron comités de prevención del delito en varias comunidades.

No obstante, la presencia del narcotráfico y los continuos ajusticiamientos entre bandas rivales agravó aún más la precaria situación. El problema de la seguridad se ha ido complicando y sus soluciones se dificultan cada día más.

El nuevo gobierno intentaba enfrentar al hampa con una nueva mentalidad, pero con unos cuerpos policíacos que habían sido estructurados para salvaguardar grupos de poder y para reprimir el descontento ciudadano. Se dio una falsa polémica entre eficiencia, por un lado, y defensa de los derechos humanos, por el otro, cuando estos dos elementos no debían estar contrapuestos sino complementarse. Otro punto falso en la discusión era el de si era necesario recurrir a la mano dura apoyada por la acción del ejército. La discusión nacional que suscitaron las nuevas leyes de corte fascista para enfrentar el crimen hacía ver que las encomiendas de carácter policíaco al ejército no habían remediado la inseguridad, que esto era una falsa salida. El Consejo Nacional de Derechos Humanos llamó la atención en cuanto a que una sociedad estaría sometida a un esquema totalitario si por razones de seguridad se le impidiera el cotidiano ejercicio de los derechos humanos. La CNDH insistía en que al ejército le tocaban tareas de seguridad nacional y no de seguridad pública. El problema de la inseguridad pública es multicausal y muy complicado. Su no solución ha debilitado al gobierno panista. Finalmente, una controversia que duró casi hasta finales de 1996 fue la que se dio en torno a los retenes policíacos.

Esto originó una dura confrontación en el gabinete panista. Mientras el secretario de Gobierno y, por su parte, el presidente municipal de Guadalajara hicieron todo lo posible por instalar retenes, el procurador de Justicia, apoyado por el secretario de Educación, se opuso por la inconstitucionalidad de los mismos. La legalidad no se podía defender ilegalmente. El reto era buscar caminos legales y eficaces.

Las contradicciones entre el PRI y el PAN

Una de las confrontaciones entre el PRI y el PAN ocurrió en torno, precisamente, a la manera de enfrentar la inseguridad pública. En lugar de que el tricolor asumiera sus responsabilidades en los problemas heredados en este asunto, se centró en el argumento de que la defensa de los derechos humanos por parte de la Procuraduría estatal no permitía combatir eficazmente a la delincuencia. Otro roce importante se dio porque, al momento de perder el poder en el estado, muchos de los terrenos en los que el PRI había construido sus edificios eran propiedad de los municipios. Esto revelaba que, por su carácter de partido de Estado, el PRI no había cuidado las formalidades de separación de las propiedades estatales y partidarias. Una controversia más tuvo su origen en las respuestas que dio el gobernador al dirigente estatal del PRI, cuando éste acusó a los panistas de no saber gobernar. El gobernador, en lugar de solicitar a un dirigente del PAN que se encargara de esta disputa, entró en el debate calificando a las afirmaciones del dirigente priísta como barbaridades, lo cual provocó que el PRI amenazara con abandonar la discusión de la reforma del Estado en la entidad. Algunos líderes priístas acusaron a grupos panistas ligados al DHIAC de ser responsables de amenazas personales anónimas. Diputados priístas solicitaron juicio político contra el secretario de Gobierno, acusándolo de no cumplir con sus obligaciones en las tareas concernientes a la seguridad pública.

Otro renglón que también tensó la difícil relación entre el partido saliente y el entrante a las funciones gubernamentales fue la insistencia panista en limpiar la administración pública y perseguir toda corrupción. Se empezó a llamar a que hicieran aclaraciones a funcionarios del PRI de la administración anterior, y entre ellos al mismo ex gobernador. El PRI se quejó de un espíritu de linchamiento y de agresión. Los panistas encontraron que faltaban comprobaciones por 25 millones de dólares en lo relativo a la línea 2 del tren ligero, la existencia de recibos por 10 millones de dólares por algo que había costado ocho millones en un servicio de comunicación, y aun el cobro de obras no realizadas, como una pavimentación. Pero lo que prevaleció fue que, aunque existían indicios de fugas, la mayoría de éstas aparecían como legales. Los dirigentes locales panistas precisaron que en la administración anterior se había dado la presencia de pillos, pero no de tontos, pues habían logrado borrar las huellas que pudieran implicarlos en corrupción. Prueba de que anteriormente se habían dado no pocas fugas de recursos fue el hecho de que la nueva administración operó con menos gasto que la anterior. No obstante, en esto no hubo precisamente partidismo, pues entre los municipios en los que se hizo un examen minucioso de la administración estaban algunos dirigidos por panistas. Fue quedando claro que hubo particulares que habían dado dinero a la campaña priísta con la promesa de futuros favores. Por su parte, los priístas denunciaron una compra a sobreprecio de alimentos para reclusos. El gobernador aceptó la renuncia de un director administrativo. En el combate a la

ilegalidad en el manejo de los recursos, una baja fuerte fue la del alcalde neopanista de Zapopan, quien creyó estar por encima de las normas y privilegió a familiares en la entrega de obras. Un militante perredista fue el primero en dar la voz de alerta. El caso pasó a la prensa. Los priístas quisieron aprovechar esta ocasión; pero quienes empujaron hacia la salida del presidente municipal y a que se le hiciera un juicio político fueron muchos dirigentes panistas que se sintieron traicionados en un punto muy sensible. Los panistas han insistido en llevar adelante una lucha contra la falta de transparencia en el poder y contra cualquier asomo de corrupción, sin importar filia-ciones partidarias.

Pese a que hubo reuniones entre dirigentes priístas y el gobernador, la relación entre el PRI y los nuevos gobernantes estuvo llena de escollos en el primer año de Cárdenas Jiménez. El PRI aducía que quería ser una instancia crítica del gobierno panista, pero no tenía autoridad moral para hacerlo. Es más, en muchos de sus desplegados había una especie de autoinmolación inconsciente, porque la mayor queja era que no se veía el cambio dado que todo seguía igual.

Por otra parte, el PRI no actuó como bloque. Pronto se vio que en su seno se acentuaban las fracciones y las pugnas entre los grupos. Así, una mayoría de diputados desconoció a su coordinador sin contar con la anuencia de la dirigencia estatal. Hubo dos viejos priístas que, cuando se discutieron la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, se sumaron a los panistas y no siguieron el voto de sus compañeros.

Los panistas habían prometido que habría elecciones de delegados en los municipios; pero temiendo el predominio de los caciques prefirieron seguir con la tradición de que los alcaldes los nombraran. El PRI estatal se lanzó contra el presidente municipal de Techaluta, al que acusaban de querer imponer reglamentaciones conservadoras. El presidente municipal se defendió públicamente: era falso que hubiera prohibido el uso de minifaldas, la confrontación real era con un viejo líder de la CROC que se había enojado porque no se permitía la venta de licor a menores. Ésta era simplemente una de las señales de cómo los cambios habían afectado intereses locales. El PRI argüía que había motivaciones religiosas en los nuevos reglamentos municipales, y emprendió una larga campaña de presión y movilización pública contra las autoridades de ese municipio. Tuvo *que* intervenir el Congreso para mediar el conflicto.

Las principales contradicciones entre el PRI y el PAN se dieron en el terreno del desmembramiento del corporativismo. Con la entrada de los panistas los controles de los líderes de taxistas, camioneros y comerciantes se vieron relajados. No pocas de sus antiguas bases aprovecharon para liberarse. Los priístas organizaron marchas y plantones para resguardar sus antiguas posiciones. Pero las nuevas reglamentaciones les fueron quitando poder.

Otro motivo de enfrentamiento entre el PRI y las nuevas autoridades panistas ocurrió en relación con la renovación de magistrados del Poder Judicial. Era voz común que el más corrupto de los poderes era el Judicial y que ameritaba una limpia, Pero la manera como el secretario de Gobierno intentó emprenderla lo debilitó, pues no se podía actuar con los viejos métodos, Trascendió que había ofrecido 150 mil pesos a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia para que, tomando esa cantidad como una jubilación, renunciaran a su inamovilidad. También corrió el rumor de que en un principio pareció que los magistrados habían aceptado, pero que cuando se enteraron de que en Guanajuato el monto había sido de 500 mil, ya no

quisieron y denunciaron el hecho. El PRI aprovechó esto para atacar al secretario de Gobierno, quien a su vez se defendió insistiendo en que no había solicitado la renuncia y que no había ofrecido dinero.

Un motivo más de roce entre los dos partidos lo constituyó el anuncio de una reforma del Estado por parte de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En realidad el acto parecía diseñado para que se viera que no había pugnas entre el Ejecutivo y el Judicial; pero en el formato de la convocatoria de la reforma del Estado quedaban excluidos los partidos. El PRI aprovechó para declarar que no participaría en dicha reforma. El Ejecutivo tuvo que rectificar y propiciar la constitución de una comisión en la que quedaron incorporados tanto los partidos como el Consejo Electoral.

Otro incidente conflictivo sucedió en ocasión de la reaparición pública en Jalisco de Cosío Vidaurri. Este personaje había tenido que dejar la gubernatura a raíz de las explosiones del 22 de abril de 1992. Como consolación el gobierno federal lo había enviado a una embajada. En los primeros meses de 1996, con su regreso a Jalisco, Cosío Vidaurri dio muestras de que quería jugar un papel protagónico en la política local y recomponer a su maltrecho partido. Los damnificados y el PRD declararon que la incursión de Cosío en la política jalisciense, queriendo hacerse pasar como una víctima, implicaba una afrenta más a la ciudadanía. Cosío criticó a la nueva administración panista. Ésta esperó hasta el aniversario del 22 de abril para responder: Cosío podía ser investigado por malos manejos en la construcción de la línea dos del tren ligero.

El cambio político implicó que el PRI perdiera la hegemonía política en el estado, entrara en un gran desgaste y afrontara una gran deuda millonaria que no podía pagar (la mayoría por gastos excesivos en la última campaña política). No fue sino hasta el primer trimestre de 1996 cuando el PRI de Jalisco logró el compromiso de que el PRI nacional se hiciera cargo de la deuda de campaña. Para entonces, de un padrón de 700 mil militantes, el tricolor sólo podía contar con unos 84 mil. El PRI local estaba sumido en una crisis de desprestigio y desgaste, en espera de que los errores de la nueva administración le permitieran recuperar los puestos perdidos.

El nuevo gobierno y el resto de los partidos

Con la entrada de los panistas al gobierno, la mayoría de los partidos percibieron un ambiente de distensión. Se había acabado un marcaje estrecho de sus actividades. El mismo disidente priísta Camacho Solís pudo realizar actos en Guadalajara sin el hostigamiento al que se vio sometido en otras entidades. No obstante, con el Partido Verde Ecologista de México hubo una innecesaria confrontación. A finales de 1995 el PVEM encabezó la lucha de un grupo de vecinos de una colonia periférica que exigían la clausura definitiva de una empresa contaminante. Tenían a su favor un dictamen de no viabilidad de la misma. Exigían que se pusieran sellos para impedir que se hicieran pruebas de funcionamiento en esa planta. Para tal efecto, llevaron a cabo una toma pacífica del palacio de gobierno. Los encargados de las relaciones con los grupos tensaron dicha relación e impidieron la entrada de alimentos y cobijas. Aducían que el edificio público no era un hotel, a lo que los manifestantes respondieron que eso lo tenían muy claro, que si iban a dormir ahí no era porque no tuvieran donde hacerlo, y que permanecerían día y noche hasta alcanzar una respuesta positiva a sus demandas. Después de una semana de maltratos y desgaste, se llegó a un acuerdo. El presidente nacional

del PRD, López Obrador, en diciembre de 1996 reconoció que el gobierno panista jalisciense era mejor que el anterior.

El nuevo gobierno y la sociedad organizada

Los grandes empresarios habían apoyado la campaña priísta. Eran muchos sus compromisos con los gobiernos locales y con el federal. Algunos de ellos, con la táctica de prender dos velas, también habían apoyado al PAN. *Quienes ofrecieron un impulso* decidido al blanquiazul fueron los medianos empresarios. Con el nuevo gobierno se resquebrajó el antiguo control empresarial por parte del grupo de los empresarios mayores. Éstos, pragmáticos, vieron que les convenía instaurar buenas relaciones con el nuevo gobierno. Los pequeños empresarios empezaron a dar muestras de querer independizarse de los antiguos controles corporativos en sus gremios. De hecho, los empresarios le han ido apostando al PAN. El nuevo gobierno pudo ostentar como éxito el que, de junio de 1995 a octubre de 1996, la inversión extranjera directa se haya incrementado en 89.3 millones más que en todo el sexenio priísta anterior.

Los primeros cien días del gobierno panista hubo igual número de manifestaciones. Las más numerosas fueron las de los universitarios, las del Barzón y las de los taxistas afiliados a la CTM. Los organismos corporativos pretendían no perder antiguas prebendas. Pero las más frecuentes fueron las de vecinos, colonos y organismos que demandaban empleos, menores precios y servicios. Fue persistente la exigencia en cuanto a la dignificación del Poder Judicial. También se organizaron manifestaciones en favor del gobierno panista. En atención a grupos políticos y sociales, se efectuaron en esos primeros días 10 reuniones y fueron involucrados 50 funcionarios de gobierno. Hubo tres reuniones con la Central Campesina Cardenista, que en abril de 1996 volvió a hacer manifestaciones con demandas que debían ser resueltas por instancias federales. La Unión Campesina Democrática consiguió dos reuniones de este tipo, lo mismo que el *Frente Revolucionario de Acción Patriótica*. El gobierno fue dando seguimiento a las demandas. Para finales de 1995 el gobierno ya había realizado unas 50 mesas de trabajo, tanto con estos mismos grupos como con otros organismos que habían acudido al palacio de gobierno. Alrededor de un 50 por ciento de lo planteado se había resuelto favorablemente. A lo demás se le dio trámite.

El gobierno panista se intranquilizaba por tanta movilización. Temía que eso ofreciera una mala imagen y se ahuyentaran las inversiones que la entidad necesitaba con urgencia. Lo que sucedió fue que muchos agrupamientos sintieron que con el cambio había llegado también el momento de expresar demandas largamente insatisfechas. En la mayoría de los casos se trataba de reclamos legítimos. Ciertamente, se levantaron las resistencias de intereses corporativos, y no escasearon los grupos que sólo levantaban banderas para mantener a sus afiliados, puesto que una gran proporción de lo planteado no correspondía a la atención del gobierno estatal sino a la del federal. Esta última situación puso sobre aviso a unos funcionarios que no tenían experiencia y que temían que la mayoría de las manifestaciones sólo fueran de esta última naturaleza, Tuvieron la tentación de hacer un reglamento para el uso del palacio de gobierno. Ha habido mucha desconfianza de los grupos organizados; aunque finalmente todos han logrado ser escuchados.

Un conflicto importante prendió entre el gobierno panista y la Universidad de Guadalajara cuando los panistas quisieron

intervenir en la designación de los directores de los hospitales civiles, a quienes por costumbre ponían las autoridades universitarias. Ante el nombramiento de directores interinos, la Universidad organizó una gran marcha de protesta. Finalmente, el gobernador y el rector llegaron a un acuerdo: se instaló un consejo técnico y fueron nombrados los nuevos directores. Otro problema fue el que se suscitó entre el rector y el secretario de Gobierno con motivo de la reactivación de la pugna de la FEG, vieja organización universitaria corporativa, ya en franca decadencia por falta de los estímulos del aparato universitario, y las autoridades de las preparatorias. La FEG tomó instalaciones y externó que tenía el apoyo del secretario de Gobierno. El rector pidió una aclaración. El secretario de Gobierno respondió que no aceptaba que se le pretendiera involucrar en un problema que tenía mucho tiempo incubado en la misma Universidad. Legisladores nacionales instaron a las autoridades universitarias y al gobierno a que se aplicara la ley para no dejar impunes los acontecimientos sangrientos tan frecuentes entre las organizaciones universitarias. Finalmente, el gobierno panista y la Universidad fueron entendiéndose. La organización mayoritaria universitaria (la cual se había apoderado del espacio anteriormente controlado por la FEG), que en una manifestación había dañado unos vitrales del palacio de gobierno y que había aceptado pagar los daños, la FEU, hizo un público reconocimiento al gobierno por el otorgamiento de un descuento en transportes públicos a los estudiantes.

A principios de julio de 1995, los jubilados transportistas desalojaron la nueva central de autobuses que habían tenido bloqueada durante varios días en demanda de que el gobernador cumpliera su promesa de campaña de apoyarlos. El gobierno intervino para agilizar una solución entre jubilados y empresarios. En enero de 1996 hubo un bloqueo en el centro de la capital del estado por parte de afiliados a la Unión Campesina Democrática. Exigían que se ampliaran los plazos para la regularización de autos ilegales. El gobierno intervino para pedir una ampliación al gobierno federal. Los antiguos gremios se fueron desgajando. Así, casi la mitad de los taxistas eligieron una dirigencia disidente. Los camioneros han visto el ejemplo y se preparan a seguirlo. Lo mismo sucede con los comerciantes llamados tianguistas. Se han hecho nuevos reglamentos y, no sin conflictos, se han conseguido acuerdos de reacomodo. Esto le ha traído al gobierno panista alabanzas públicas por parte de los comerciantes establecidos.

Los incrementos en el pago de los servicios públicos como agua y transporte originaron muchas protestas públicas. También ha habido exigencias de regularización de predios y terrenos. Un pequeño grupo de manifestantes que había instalado dos tiendas de campaña frente al palacio de gobierno, donde permanecieron varios meses, finalmente fue desalojado. Se ha pedido al gobierno empleos, permisos para comerciantes, etc. Hay organizaciones políticas de izquierda que en los últimos tiempos han reactivado su presencia en la entidad y que mantienen una oposición tanto hacia el PRI como hacia el PAN.

El Barzón es una organización que ha ido ganando adeptos, y que ha realizado muchas y masivas manifestaciones. En un principio, con la dignidad herida por deudas impagables debidas a las prácticas agiotistas de los bancos, sólo deudores había en ese grupo; pero muy pronto, como ha sido una agrupación con constante actividad, atrajo a los agaveros, quienes arrastraban un conflicto con los industriales del tequila, y aun a los tiangueros con sus problemas de reubicación. En agosto

de 1995 cerca de dos mil delegados barzonistas de 22 estados de la República se congregaron en la plaza de armas de Guadalajara. En el acto intervinieron el dirigente nacional del PRD, el dirigente estatal del PAN y un regidor del PRI. Dos meses después el Barzón pidió al gobernador de Jalisco que interviniera para que se lograra un buen precio internacional del maíz y para que se instauraran condiciones favorables en orden a la negociación de las carteras vencidas. Exigieron que se reconociera la organización mayoritaria de productores de agave y que se le diera el registro a una unión ganadera en la costa jalisciense. Otra exigencia tenía que ver con la eliminación de la corrupción del Poder Judicial estatal. *En relación con estas* demandas mantuvieron un plantón frente al palacio de gobierno, y ya no sólo sacaron maquinaria agrícola a las plazas y calles, sino también animales de ganado mayor, y llegaron a introducir un toro al mismo palacio de gobierno. El gobernador, cuando candidato, había prometido apoyar a la organización ganadera de la costa; pero el reconocimiento de tal asociación dependía de instancias federales. Finalmente los barzonistas y el gobierno firmaron acuerdos, y entonces los barzonistas se plantaron ante dependencias federales. A principios de 1996 se volvieron a tensar las relaciones entre los barzonistas y el gobierno estatal. Los primeros acusaban al segundo de haber faltado a su palabra al impedir la movilización de ganado de sus afiliados. El gobierno respondió que el registro de contribuyentes del Barzón no le autorizaba a facturar ganado propiedad de terceros. A fin de cuentas, el Barzón logró el reconocimiento federal de la Organización Ganadera de la Costa y se preparó para contender por la dirección de la Unión Ganadera Regional de Jalisco, cuyo dirigente, íntimamente ligado al priísmo tradicional de la entidad, había renunciado por denuncias de malos manejos.

Las organizaciones de damnificados del 22 de abril, aledaños, inquilinos, afectados y lesionados se encontraban en reflujó, a merced de la actividad de algunos líderes y sin mayor apoyo ciudadano. Esto repercutió en que no pudieran presionar con mayor fuerza al nuevo gobierno para que se atendieran a fondo los agravios pendientes. Para finales del primer año del gobierno panista, las manifestaciones de todo tipo fueron cediendo en intensidad.

Otro conflicto en el que intervino el gobierno estatal fue el que se suscitó entre los huicholes y los franciscanos. A finales *de julio de 1995 los huicholes* exigieron que se respetaran sus derechos sobre sus tierras, que tenían invadidas ganaderos de Nayarit. Un mes después varias comunidades huicholas pidieron la salida de las sectas religiosas. Y a principios de octubre las asambleas comunales de huicholes plantearon la necesidad de que se fueran los franciscanos, aduciendo que esto tenía que ver con el interés de preservar su cultura. También demandaron autonomía política. El gobierno panista reaccionó externando que en todo esto podía haber afanes desestabilizadores, y se llegó a hablar de manipulaciones de narcotraficantes. Posteriormente, el gobierno decidió mediar en el conflicto. Los grupos de huicholes querían las instalaciones de los franciscanos para una escuela. Una vez que intervino el secretario de Gobierno, se decidió que los franciscanos se quedaban por un tiempo. Permanecieron en unas comunidades y se retiraron de otras. Según la apreciación de algunos huicholes, el gobierno, más que de mediador, participó como abogado de los religiosos.

El gobierno ha propiciado la reorganización de las asociaciones de vecinos. Se intenta la autogestión y descentralización

de los servicios públicos. Pero lo ocurrido durante el primer año y el enfrentamiento con los grupos ya existentes lo ha hecho desconfiar de ellos. Piensa, o que son priístas que quieren obstaculizar su actuación, o que son agrupaciones cuyos líderes no quieren soluciones sino mantener banderas y asegurar su permanencia. No obstante, con no pocas dificultades, ha prevalecido una apertura hacia la mayoría y se han buscado algunas soluciones. El panismo en el gobierno, con no pocos golpes, parece que va aprendiendo a dialogar con los grupos. Por su parte, varias organizaciones civiles ya existentes le *han* dado tregua al nuevo gobierno, y han aparecido nuevas agrupaciones sociales y políticas, aunque no logran todavía atraerse la confianza de muchos ciudadanos. A mediados de julio de 1995, diversos organismos le presentaron al gobernador la carta de derechos ciudadanos (elaborada en un congreso nacional de organizaciones no gubernamentales), que Cárdenas Jiménez prometió tener en cuenta. A principios de 1996 el gobierno panista auspició una reunión internacional de organizaciones no gubernamentales. Pero es el gobernador quien ha mostrado más sensibilidad política. Entre los funcionarios menores panistas, muchos de extracción empresarial, hay una confusión en el trato con los grupos ciudadanos que se acercan a plantear sus demandas. Les cuesta trabajo percibirlos en verdad como ciudadanos y quieren hacer prevalecer una relación con ellos como la que se establece entre un empresario y sus obreros.

Las contradicciones al interior del equipo gobernante

El secretario de Gobierno ha propiciado muchos conflictos que han dañado la figura gubernamental. Es más, en la contradicción entre los grupos panistas se ha dado cierto entrapamiento, pues algunos están intentando fincar su trayectoria política impidiendo el crecimiento de oposiciones cercanas, y pronto afloraron ambiciones futuristas. Entre los funcionarios panistas ha habido actos de espionaje y obstaculización que finalmente redundaron en problemas de gobierno. El alcalde tapatío, también neopanista, pareciera que aspira a conseguir mejores posiciones políticas por su cuenta. Así, el día del primer informe del gobernador el alcalde tapatío arremetió contra los tianguistas, los cuales, enardecidos, se fueron a quejar al palacio de gobierno. Este hecho oscureció el acto del gobernador. El PRD opinó que, o el alcalde era muy tonto, o pretendía con toda mala intención que el gobernador pasara, precisamente en ese importante día, un mal rato.

Entre los nuevos gobernantes panistas es posible detectar tres grandes bloques. El primero, comandado por el secretario de Gobierno, está compuesto por elementos del denominado grupo Zapopan y por el núcleo formado por el gobernador cuando era alcalde de Ciudad Guzmán. Este grupo es el hegemónico. Sin tener en cuenta el descontento masivo que produjo en 1995 la debacle priísta, se ostenta como el padre y responsable de la victoria panista jalisciense. En él se encuentra la mayoría de los llamados neopanistas, aunque éstos han mostrado mucha ambición, y quienes integraban anteriormente un sector más compacto han ido entablando competencias intergrupales por conseguir nuevos puestos políticos. Otro sector está integrado por viejos y jóvenes panistas, catalogados como tradicionales porque invocan los principios y la doctrina panistas. Este agrupamiento ha mantenido el control tanto del aparato partidario como del Congreso estatal. En el afán de mantener una sana distancia con el Ejecutivo se ha mostrado

distante y a veces con una práctica paralela.

Simbólicamente, el predominio del primer bloque se ha mostrado en que la única estatua de un panista que hay en la zona metropolitana no es la de un jalisciense (como podría haber sido la de uno de los teóricos más profundos del panismo y constructor de las raíces del panismo en Jalisco, don Efraín González Luna), sino la de Clouthier. Además, las únicas letras de bronce que públicamente recuerdan al panismo tampoco son las que expresan alguna frase sólida y bien elaborada de quien fuera el primer candidato panista a la Presidencia de la República, en 1952, sino las del candidato albiceleste en 1988. Así, al lado de la figura de Clouthier se puede leer una expresión que bien examinada resulta injuriosa para la actividad ciudadana: “México cambiará contigo, sin ti o contra ti”. Por tanto, independientemente de si ese cambio predeterminado e inexorable sea para bien o para mal, la acción de los ciudadanos resulta totalmente prescindible.

En un tercer sector del nuevo gobierno panista se encuentran destacados miembros de la sociedad tapatía que, sin haber formado parte de los dos grupos anteriores ni tener una militancia reciente panista, fueron llamados por el gobernador para obtener apoyo de importantes franjas de la élite jalisciense. En la prensa, en contraposición a los neopanistas, se les ha definido con el mote de los no panistas. Se pueden ubicar ahí las personalidades con prestigio a quienes se les encomendaron las secretarías de Educación, de Finanzas, de Desarrollo Rural y la Procuraduría de Justicia del estado. Éstos no han formado propiamente un grupo. Pero el secretario de Gobierno y sus más allegados se han empeñado en poner obstáculos a su desempeño. En la jerarquía del primer grupo no es prioritario el servicio a la colectividad sino el propio interés cuidado pragmáticamente, lo cual lo ha llevado a situaciones facciosas. A principios de 1997, esta contradicción todavía no había sido resuelta por un gobernador que se sentía deudor del primer bloque, pero que entendía que un respaldo importante de las élites y de sectores con peso en la entidad dependía del tercer sector.

Algunos logros del nuevo gobierno

Para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo hubo apertura. En él se encuentran muchos de los planteamientos de la sociedad civil, pero para algunos panistas faltaría la definición doctrinaria propia de su partido. Para los partidos opositores dicho plan no pasa de ser un listado de buenas intenciones, sin matices que le permitan tener realizaciones de fondo y obtener metas específicas. Su gran logro es que es fruto de una discusión plural y no una imposición panista. El gobierno blanquiazul se plantea la necesidad de no ser prepotente ni intransigente, sino democrático, humanista, abierto, que escuche y dialogue. El primer tramo le ha propiciado el que ponga a prueba estos deseos. Dado que el gobernador proviene de una gestión municipal, ha ido impulsando la autonomía municipal. A los municipios se les ha otorgado el 10 por ciento de las participaciones que por ley el gobierno les debe dar, y se rediseñaron los coeficientes de participación buscando beneficiar a los municipios más necesitados, lo cual implicó que tuvieran un incremento en sus percepciones de un 40 por ciento, y hasta de un 100 por ciento más que en el año anterior. A partir de 1996 se empezaron a pasar a los municipios los recursos del combate a la pobreza. El Plan Estatal de Desarrollo reconoce como algo muy grave

el aumento de la pobreza, del desempleo, de la delincuencia y del deterioro ecológico. Apunta que se trata de males que tienen que ver con políticas inadecuadas del gobierno federal. Propone oír las denuncias de los ciudadanos, y para esto se instalaron buzones en los municipios. Plantea que es necesario que se den nuevas formas de consulta ciudadana, como el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular.

Durante el primer año hubo roces entre la dependencia federal de la Sedesol y la subsecretaría de participación social. En 1996, en ocasión del traslado de recursos del antiguo Programa de Solidaridad a los municipios, el gobernador integró a su equipo en el Coplade al que había estado de titular en la dependencia federal de la Sedesol. Esto se consideró tanto una apertura de su parte como una medida atinada, puesto que se evitarían problemas en el cumplimiento de la normatividad en el destino de tales recursos.

Una de las mayores pruebas que pueda tener un gobierno es su capacidad de respuesta adecuada ante un desastre. Un duro examen en esta materia lo aprobó el nuevo equipo panista. El 9 de octubre de 1995 en la costa de Jalisco hubo un temblor de 7.5 en la escala de Richter. Dañó viviendas, escuelas, edificios públicos, centros de salud y templos en 62 municipios. Pero los más dañados fueron tres: Cihuatlán, Cuautitlán y La Huerta, en los que los ayuntamientos estaban en manos priístas. Tres horas después del siniestro se encontraba allí el gobernador, quien convocó a dependencias federales y estatales a trabajar coordinadamente. Primero se atendió a lesionados y heridos, se hizo una evaluación de la zona afectada, se restablecieron los servicios (agua, energía eléctrica, vías de comunicación) y el suministro de combustible y de alimentos, y se establecieron albergues. Se constituyó un comité de reconstrucción. Muchas de las casas se derrumbaron debido a que los migrantes al construir no habían tenido en cuenta las características de la zona. Se organizó un equipo técnico para evitar que en la nueva construcción se cometieran los anteriores errores. El dinero destinado a los integrantes de un censo bien elaborado de damnificados se entregó a fondo perdido dada la situación de la gente, pues se pensó que esto era mejor que darlo a la palabra (como en Solidaridad), lo cual orillaría a la gente a faltar a la misma. Ante las presiones de los alcaldes priístas, que querían acaparar los recursos, se fomentó la organización de los pobladores y un acopio honrado de los recursos. Si en otros desastres la principal queja ha versado sobre el desvío de la ayuda, ahora no fue el caso. El lema fue “más pueblo y menos gobierno”.

El ex rector de la Universidad de Guadalajara, ante el primer informe del gobierno panista, enfatizó que el gobernador mantenía un alto nivel de simpatía entre los ciudadanos comunes, pero que por la crisis económica no se podía presentar un balance exitoso. Ciertamente, no había grandes obras que presumir. Otro error del nuevo gobierno, lo constituyó la precipitada autorización del incremento a las tarifas del transporte público sin cuidar las formalidades de ley. También hubo una serie de críticas debido a que el gobierno panista ha hecho novatadas, pues faltaba experiencia, por una parte, y había resistencias al cambio, por otra. Ante esta situación, tanto el gobernador como la jerarquía eclesiástica solicitaron de paciencia a la población.

Un logro nada desdeñable del gobierno panista ha sido que se mantuvo el funcionamiento del aparato gubernamental con una quinta parte menos del gasto presupuestal, en comparación con el último año de la administración priísta. Se racionaron los recursos y se clarificó el gasto. La deuda

pública (adquirida en los años anteriores y de una magnitud desproporcionada a la capacidad de pago del estado) creció con el incremento de las tasas de interés. Se renegoció, y en 1995 no se contrató deuda adicional. Los panistas enfatizaron que harían más con menos. Se ha hecho hincapié en la lucha contra la corrupción y en la búsqueda de eficiencia de la administración pública. Los diputados panistas locales se ufanaron de que en ninguna de las legislaturas anteriores se habían discutido con tanta transparencia los presupuestos estatales. Hay un buen nivel de gasto en educación, salud y desarrollo agropecuario. Otro logro que hay que reconocerle al nuevo gobierno es que ha habido respeto a la separación de poderes. El Legislativo y el Judicial han actuado sin intervenciones ni consignas del Ejecutivo. También éste ha sido celoso en resguardar su independencia con respecto de su partido.

Las calificaciones del nuevo gobierno

Se fueron haciendo periódicas las encuestas que indagaban el sentir popular en relación con la actuación gubernamental. Los resultados de dichas encuestas, la mayoría realizadas por el Centro de Opinión de la Universidad de Guadalajara (CEO), se difundieron en la prensa local. A principios de julio de 1995 el gobernador alcanzaba una calificación de 7.1 y el alcalde de Guadalajara, de 6.8. Semanas después, el diario *Reforma* consignaba que Cárdenas Jiménez era calificado con un 7.3. Tres meses más tarde el CEO constataba que mientras los tapatíos reprobaban al presidente Zedillo con 5.1, al gobernador jalisciense lo aprobaban con 6.5. Para entonces, el alcalde tapatío sobrepasaba la calificación presidencial sólo con una décima. En noviembre de 1995 el gobernador seguía siendo aprobado por los encuestados, pero iba a la baja, con un 6.3, mientras el alcalde tapatío tenía una mejoría de cuatro décimas, pero todavía no rebasaba el nivel de reprobación. Para finales de 1995 los tapatíos insistían en dar una calificación reprobatoria al presidente Zedillo, y subían en su apreciación del gobernador, al que volvían a colocar en un 7.3. El alcalde de Guadalajara remontaba hasta un 6.6. A principios de 1996, Zedillo caía otra vez a niveles de reprobación, después de que en el segundo mes de 1996 había logrado pasar con lo mínimo. El alcalde de Guadalajara de nueva cuenta se desplomaba a un 5.6. Por su parte, el gobernador sufría una merma en sus calificaciones, para colocarse en un 6.5, cifra que todavía lo seguía aprobando y que no significaba el nivel más bajo de sus evaluaciones.

El poder desgasta, y más cuando se inicia un aprendizaje en su ejercicio. La actuación de los gobernantes repercute en el ánimo público. De alguna forma, esto afecta a sus partidos. Así, a la pregunta de por qué opción partidaria votaría si en el momento de la encuesta fueran las elecciones, de principios de junio a finales de octubre de 1994 el PAN bajó de 55.3 por ciento a 47.9 por ciento, mientras el PRI experimentó un ligero repunte, que de un 18.8 por ciento lo hizo brincar a un 20.3 por ciento. Por su parte, el PRD sufrió un descenso, pues de un 8.8 por ciento pasó a un 7.9 por ciento. Semanas más tarde la tendencia seguía: por el PAN votaría un 47.2 por ciento, por el PRI un 24.4 por ciento y por el PRD) un 6.1 por ciento. No obstante, a principios de 1996 el PAN se elevó a un 59.1 por ciento, el PRI cayó a niveles del 18.6 por ciento y el PRD se desplomó hasta un 2.9 por ciento. En la última semana de marzo de 1996, después de una crisis política a causa de la inseguridad pública que se manifestó con estridencia en febrero, el PAN decayó al porcentaje más bajo

desde su triunfo, un año atrás: se deslizó hasta un 44.5 por ciento; en contrapartida, el PRI mejoró considerablemente para elevar su porcentaje hasta 28.5 por ciento. En este reajuste, el PRD mantuvo un perfil bajo de un 3 por ciento. Para estas fechas, si anteriormente el ánimo de la ciudadanía había situado en los primeros sitios los problemas económicos, ahora apreciaba que lo más urgente tenía que ver con la inseguridad pública. En el segundo mes de 1996 un tercio de los encuestados opinaba que todo seguía igual, otro tercio aseguraba que había mejoría y un tercio más se quejaba de que el gobierno había empeorado.

Al principio, el alcalde tapatío no quería darle importancia a este tipo de calificaciones, pero posteriormente se convenció de que cada encuesta reflejaba como en una fotografía el ánimo de los encuestados en un momento dado. Por su parte, el gobernador, precisando que tampoco les daba un cien por ciento de credibilidad, aceptaba que sí tenía en cuenta sus resultados para evaluar su gobierno. Consideró que la baja tenía que ver con dificultades de la crisis, con el anuncio que se había tenido que dar sobre el incremento de algunos servicios, con el incremento del desempleo, pero sobre todo con los graves problemas de la inseguridad pública. El PRI se alegraba de su recuperación. No obstante, comparadas las cifras electorales con las apreciaciones de la encuesta de marzo de 1996, el PAN mantenía una distancia que lo situaba por encima del PRI con alrededor de 16 puntos porcentuales. De junio a octubre de ese año esa distancia se fue cerrando, no por recuperación priísta, sino por decaimiento panista. A finales de 1996 la brecha entre los dos partidos se volvió a abrir. El PAN se alejó 14 puntos del PRI. Las 14 encuestas realizadas por el CEO sobre preferencias partidarias desde el triunfo panista muestran que las variaciones tienen que ver con actitudes de la opinión pública en torno a coyunturas conflictivas. De los 14 exámenes, el presidente de la República sólo ha aprobado cuatro, y éstos con mínimas calificaciones. En contraste, el gobernador panista siempre ha resultado aprobado, y en el último examen alcanzó la calificación de 7.2. Cabría anotar que el PRD ha ido ganando terreno y que concluyó 1996 con un 7.1 por ciento de las preferencias electorales. Lo que resulta revelador ha sido la variación en las antipatías. Mientras quienes indicaban que no votarían por el PRD bajó de un 25.6 por ciento a un 19.4 por ciento, y las relativas al PAN se incrementaron levemente de un 14.9 por ciento a un 16.3 por ciento, quienes sentían repulsión a sufragar por el PRI fueron aumentando hasta colocarse en un 43.6 por ciento. La corrupción, la impunidad y la crisis económica nacional han ido impulsando a capas de ciudadanos jaliscienses a alejarse del PRI. El PRD no ha tenido que hacer prácticamente nada para mejorar. El PAN se ha mantenido con una amplia aceptación ciudadana.

Los alcances del cambio

El gobierno panista tiene la legitimidad que le dio una mayoritaria y amplia votación. Ha incursionado en el gobierno con buenas cartas en lo administrativo y con no pocas deficiencias en lo político. Algunos allegados al nuevo equipo quisieran imponer cruzadas intolerantes a una sociedad plural y ya muy secularizada. Ha habido dificultad en la relación con los medios de comunicación, que en su mayoría han sido utilizados desde el centro por el partido del Estado para lanzar campañas en contra del gobierno panista. En algunos sectores de los medios masivos, el cambio de gobierno ha implicado el que algunos

comunicadores perdieran privilegios propios de una cultura política de corrupción, el nuevo equipo no ha acertado a establecer una política efectiva de comunicación con la sociedad, y hay algunos núcleos entre los nuevos gobernantes muy susceptibles a la crítica. Correlativamente, se han mostrado capas de la población que también reaccionan con desaprobación a cualquier tipo de crítica hacia el nuevo gobierno. Estos núcleos en el gobierno y en la sociedad lejos están de entender que la democracia implica apertura y tolerancia.

El priísmo perdió la hegemonía. Sin embargo, el nuevo equipo, urgido por las tareas cotidianas, se vio obligado a gobernar con el mismo aparato de régimen de partido de Estado previo. Se ha ido encarando el gobierno al día, sin oportunidad para reflexionar en el proyecto general alternativo. Hay espacio para muchas propuestas, pero no para su puesta en práctica. La burocracia, los cuerpos policíacos, las estructuras corporativas de los núcleos más sólidos prosiguieron, y con ellos tuvieron que operar los panistas. Lo viejo perdió espacios de poder. El desmantelamiento se pudo ir dando en los puntos más débiles, donde se aflojan las antiguas relaciones clientelares y los liderazgos corporativizantes empiezan a perder influencia. Pero la estructura corporativa es de difícil desmantelamiento y hay tentaciones de contraposición de nuevos corporativismos, lo cual no puede ser una solución ciudadana. Con la distensión del nuevo gobierno se abrieron espacios para nuevos reclamos. Muchos excluidos han ido demandando atención.

La lucha de las viejas estructuraciones para no perder zonas de influencia ha sido tensa y dura. Ha habido reacomodo de las élites de poder. Los panistas tienen el gobierno, pero lejos están del poder estatal. Así, ha habido cierta contraposición con los espacios controlados en la región por los entramados de viejas complicidades donde lo militar muestra un peso determinante.

El gobierno ha sabido reconocer errores y enmendarlos, como fue el caso de su primera convocatoria a la reforma política. Otro acierto ha sido *que ésta no la ha querido dejar reducida sólo a lo electoral, sino que pretende contemplar toda la estructuración de los poderes y resalta los aspectos federalistas y municipalistas*. Se ha tratado de crear una nueva cultura que erradique la idea tradicional de que el Ejecutivo debe predominar sobre los otros poderes.

Si bien en los medios de comunicación se ha criticado el estilo ranchero y hasta ingenuo del nuevo gobernador, quien además tiene equivocaciones en sus discursos, esto es precisamente lo que para el ciudadano común lo hace confiable, porque lo siente no formalizado y falso, sino cercano. Por su parte, la jerarquía eclesiástica ha visto con buenos ojos a la nueva administración, y con indulgencia y aceptación le ha concedido tiempo.

Los dos primeros años de la gestión panista no han sido suficientes para erradicar añosas estructuras consolidadas. Pero ha habido un cambio, y se nota. El priísmo, por su parte, no acierta a operar como oposición. El panismo insiste en la honradez (que para la sociedad resulta un respiro, porque la corrupción corroe la democracia), pero no basta para gobernar. En una época de aguda crisis económica, se requieren políticas sociales que atiendan graves e impostergables necesidades de amplios sectores de la población. Es un avance el que el gobierno declare que en Jalisco ya no se comprarán votos ni voluntades con el hambre. Se impone un adecuado manejo que relacione democratización y gobernabilidad. Las esperanzas de cambio en la población que votó por los panistas son grandes. Las posibilidades, muy limitadas. Se heredó toda una maqui-

nares vicia y adversa con la que se tiene que gobernar y que hay que ir desmantelando y creando nuevos instrumentos. El cambio ha implicado conflictos que se han manifestado, no pocas veces, con estridencia. Los cambios han sido limitados, acotados, entorpecidos, pero se van dando. El panismo se encuentra ante el reto de emprender una transición que sea una alternativa para una sociedad muy necesitada y agraviada. Pero para esto tendría que hacer un pacto con esa sociedad que le ha dado el beneplácito y beneficio de los inicios, para encabezar, sin temerles, no pocas de sus demandas frente al aparato del Estado.

En un momento de recrudescimiento de los problemas por la inseguridad, se llegó a hablar de ingobernabilidad en Jalisco. Eso fue un exceso verbal que no correspondió a la realidad. La gobernabilidad tiene que ver con las condiciones necesarias para desempeñar esa función con legitimidad y respaldo social; la ingobernabilidad implica indisciplina de ciudadanos e ilegalidad (Alcántara, 1995), situación que no se dio en el primer año del gobierno panista. Ciertamente, la crisis y los cambios son detonantes de ingobernabilidad; pero el gobierno panista, pese a las dificultades del reacomodo de la transición y a que no la ha podido concluir, no ha estado en tal extremo. Se tiene que consumar la transición en una entidad federativa, y se deben ampliar los espacios democráticos. La democracia no se limita sólo a derechos individuales ni al acatamiento de las reglas de un juego constitucional; implica la articulación de problemas sociales, de proyectos colectivos, de civilidad, y tiene que ver con fórmulas de gestión negociada de demandas sociales y de conflictos. No es factible reducir las relaciones sociales a una regulación mercantil que implica segregación, y abre espacios a la violencia y a la anomia.

La globalización de la economía ha ido descomponiendo antiguos nexos sociales. La principal dificultad de la transición radica en que una nueva opción política ha llegado al gobierno del estado de Jalisco, ha accedido al gobierno; pero los controles estatales se encuentran en otro sitio. Las principales decisiones económicas para dinamizar la región y atenuar conflictos de inseguridad pública no están en sus manos. Tiene que negociar con el ejército que se le permitan determinados movimientos que los cuerpos militares no quieren soltar. El narcotráfico y sus anudaciones estatales tampoco permiten muchas maniobras, y hay afanes revanchistas porque un nuevo estilo, ligado a la defensa de los derechos humanos, ha ido atentando contra maneras de proceder y focos de influencia económica y de poder. Un claro ejemplo de la trabazón que no permite al nuevo equipo cumplir promesas de campaña es que, en lo relativo al 22 de abril, que constituyó uno de los grandes crímenes de Estado, se encuentra fuera de las verdaderas decisiones del gobierno panista. Al nuevo equipo le ha faltado decisión para encabezar importantes demandas populares. En la disputa en torno a como se encara la inseguridad pública en la entidad, el problema va más allá de personas y se centra en líneas de relación de lo gubernamental con la sociedad. Hay claros intentos de quebrar la inicial y aún tímida iniciativa de buscar una procuración de justicia con respeto a los derechos humanos, para que se impongan los grupos de poder que quieren dar el claro mensaje de que son intocables y que sus espacios no los cederán a quienes no transen con ellos. Hay grandes poderes que persisten y se mantienen y que el voto regional no los ha podido tocar. Además, ha habido lo que se podría llamar cierta contaminación en el manejo de lo político por parte del nuevo equipo de gobierno. El pragmatismo de sus principales opera-

dores los ha llevado al terreno de los regateos y a las aspiraciones de traducir y perpetuar sus conquistas grupales, por lo que maniobran en la lógica de los acomodados y arreglos tradicionales del régimen del partido de Estado. En todo esto se ha pretendido crear confusión en la sociedad y desviar la atención de los verdaderos responsables de la inseguridad. Hay venganzas de poderes tocados y riesgos de nuevos autoritarismos, amparados por una lógica de eficientismo inmediateista. Se requieren nuevas formas de gobierno y no caer en la tentación de recurrir a viejos saberes que han sido repudiados por la ciudadanía. El gobierno panista cuenta con un gran consenso, pero se encuentra acorralado en lo que al uso de la fuerza respecta, porque no tiene el pleno control de ésta. En esta forma, todavía no puede hacer la necesaria combinación de ambos indispensables ingredientes de la política, y se encuentra en cierta debilidad y corre no poco riesgo. Cuenta a su favor con las experiencias de otras gubernaturas panistas (Baja California, Chihuahua y Guanajuato), pero no se nota que las haya estudiado y evaluado a fondo para sacar las consecuentes lecciones (Aziz, 1995; Rodríguez y Ward, 1994; Guillén, 1993, y Rionda, 1997).

Si bien es un avance en el sentido democrático el que se haya pugnado por la desarticulación de viejos corporativismos, persiste el peligro de la instauración de nuevos. La desconfianza de lo anteriormente organizado ha orillado a algunos sectores del gobierno panista a relegar grupos constituidos y a propiciar la formación de otros afines al nuevo gobierno (Ramírez, 1997). Ha habido desarticulación de los grupos de la sociedad civil, que no han acertado a ver los verdaderos nudos y no han podido embestir donde se encuentra la real manipulación. No se ha dado propiamente una transición a estilos democráticos. Hay muchas aspiraciones de la sociedad civil, pero hay muchos espacios que muestran pasividad. El gobernador ha dejado ver que hay distensión política, buena voluntad, pero durante todo el año ha mostrado que faltan las mediaciones que traduzcan en obras lo declarativo. Hay ausencia de un sólido proyecto con metas y etapas precisas. Es mejor que los grupos sean oídos que reprimidos, pero necesitan que eso se traduzca en acciones, que son las que han faltado. Para colmo, no se ha erradicado un mecanismo desgastante que consiste en que, si bien los grupos son oídos, esto sucede después de que tienen que pasar una barrera que intenta detenerlos. En no pocos núcleos del gobierno panista existe una concepción de que la democracia es delegativa, es decir, que una vez que la ciudadanía ha votado en su favor, ésta ya no tiene nada que hacer sino esperar los nuevos comicios, y no se buscan vías verdaderas de participación de la misma en las tareas cotidianas del gobierno. Es mejor tener gobernantes honrados que pillos, pero eso lejos está de ser un buen gobierno. Se necesita que con nuevas formas incluyentes se resuelvan las demandas sociales. Para gobernar con nuevo estilo, el grupo *que* llegó al gobierno requiere apoyarse realmente en el pueblo, y no sólo en dóciles acuerpamientos adaptados al sentir del nuevo mando. Encima, éste puede ser entorpecido por las pugnas intergrupales de ambiciones facciosas. Los panistas tienen la legitimidad de origen, pero requieren reafirmarla en acciones diarias, las que no han abundado. El discurso es bueno; su traducción en realidades es todavía muy defectuosa.

Evidentemente hay que evitar volver a las maneras anteriores, pero la democracia por construir debe profundizar en lo ciudadano y conjurar todo lo que pretenda circunscribirla a una relación entre clientes. Aunque no con el auge de otros tiem-

pos, persisten los movimientos sociales. Su presencia es signo de una colectividad con vida. Hay redes y flujos que se van constituyendo y que reclaman atención y participación. Las estructuras de poder son múltiples y variables; no se agotan en lo gubernamental. Se ha dado el espacio para un encuentro democrático entre el nuevo gobierno y la sociedad, pero para esto los grupos panistas que compiten duramente entre sí deben trascender sus intereses particulares para entender lo que representa gobernar a una sociedad cada día más plural y demandante.

La completa alternancia implica que el PRI se convierta en un partido más en un equilibrado esquema de partidos, que abandone sus privilegios (apoyos desde el aparato de Estado, utilización de colores patrios, etc.) y que compita en condiciones reales de equidad. Pero la alternancia política no basta para responder a las aspiraciones de las mayorías depauperadas de los mexicanos. Es indispensable llegar a un proyecto económico alternativo que responda a las necesidades de la población. La política económica del neoliberalismo, después de 14 años de aplicación, tendrá algunos índices macroeconómicos a su favor, pero lejos está de responder a los reclamos diarios de las mayorías. No se ha dado un proceso de incorporación de los sectores populares ni de las clases medias en las relaciones económicas, con capacidades para retener el valor agregado por ellos y superar la pobreza. En lugar de una auténtica búsqueda del bien común, sólo se han impuesto las fuerzas de un mercado comandado por los intereses de las grandes corporaciones financieras. Ha desaparecido como horizonte de vida la preocupación por la calidad de vida general en la población. Los cambios indispensables tendrían que llevar hacia una sociedad justa, en donde nadie quede excluido del trabajo, del acceso a bienes fundamentales en nutrición, educación, salud y seguridad. Se requiere la construcción de un nuevo Estado, que afronte sus responsabilidades por los bienes mínimos que merece todo ciudadano por el hecho de ser persona. Si la alternancia política sólo se preocupa por nuevos equipos gobernantes, y no por nuevas formas de resolver los problemas fundamentales de la población, se habrá ganado un poco en democracia, pero lejos se estará de las soluciones de fondo.

Bibliografía

Alcántara, Manuel, *Gobernabilidad, crisis y cambio*, México, FCE, 1995.

Alonso, Jorge, *El cambio en Jalisco*, Guadalajara, CCEJ/CIESAS/Universidad de Guadalajara, 1995.

Aziz Nassif, Alberto, *Territorios de alternancia (el primer gobierno de oposición en Chihuahua)*, México, CIESAS/Triana, 1996.

Gómez, Alicia y María Marván, "El reto de crear una nueva relación entre gobernantes y gobernados. El PAN en Jalisco", en *Revista Universidad de Guadalajara*, núm. 2, diciembre de 1995-enero de 1996, pp. 50-55.

Guillén, Tonatiuh, *Baja California 1989-1992: alternancia política y transición democrática*, Tijuana, El Colegio de la Frontera Norte/CIH-UNAM, 1993.

Middlebrook, J. (coord.), *Mexico's Partido Acción Nacional in Comparative Perspective*, San Diego, University of California, 1996 (de próxima publicación).

Rionda, Luis Miguel, *Guanajuato: democracia de laboratorio*, tesis de doctorado, CIESAS-Universidad de Guadalajara, 1997.

Ramírez, Juan Manuel *et al.*, *Gobernar Guadalajara. Demandas ciudadanas y respuestas de los Ayuntamientos*,^c1997 (en prensa).

Rodríguez, Victoria E. y Peter M. Ward, *Political Change in Baja California. Democracy in the Making?*, San Diego, Center for U.S.-Mexican Studies-University of California at San Diego, 1994, Monograph Series, 40.

Torres, Gabriel, "Ciudadanización y politización: las elecciones jaliscienses del 95", en *Relaciones*, núm. 60, otoño de 1994, pp. 189-220.

Ziccardi, Alicia, *La tarea de gobernar: gobiernos locales y demandas ciudadanas*, México, Miguel Ángel Porrúa/Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM, 1995,